



**Derecho a la asociación,
reunión y participación**

Movimiento campesino: siguen los mismos problemas

Quintín Riquelme

Centro de Documentación y Estudios (CDE)

En 15 años de apertura política, los problemas siguen siendo los mismos. Ninguno de los gobiernos ha podido establecer ni una estrategia de reforma agraria ni de desarrollo rural. En el caso particular de la tierra, el Estado no tiene una estrategia de distribución equitativa ni un plan de desarrollo rural que contemple los intereses del sector campesino en toda su diversidad. La tierra cada vez está más concentrada en poder de pocas manos. Grandes contingentes de poblaciones campesinas se trasladan a las ciudades sin ninguna perspectiva de bienestar, debido a la saturación del mercado laboral.

DIAGNÓSTICO

En los tres últimos meses del año 2004, las acciones represivas del gobierno se manifestaron en toda su dimensión contra las organizaciones campesinas. Éstas lanzaron una gran ofensiva demandando el derecho a la tierra, a la soberanía y al desarrollo rural como puntos principales. Los reclamos campesinos también hablan del avance incontenible de la producción de soja transgénica, cuyas consecuencias han supuesto la destrucción de bosques, la contaminación ambiental y la expulsión compulsiva de pequeños productores/as de sus lotes. El gobierno, por su parte, sigue resistiéndose a desafectar los latifundios.

La represión, el desalojo, la destrucción de casas y cultivos y la cárcel fueron las respuestas inmediatas del gobierno a los reclamos campesinos. La otra respuesta fue la judicialización de las acciones del sector, con la cual el gobierno buscó eliminar posibles nuevas protestas de los actores involucrados. La avalancha de ocupaciones de tierras centradas en los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Canindeyú, Alto Paraná e Itapúa motivó al gobierno a movilizar sus fuerzas públicas (policías y militares), además de lanzar una campaña de descrédito contra las organizaciones campesinas ante la opinión pública con el propósito de crear el escenario en el que los ocupantes de tierras aparezcan como delincuentes y desestabilizadores/as, buscando deslegitimar las protestas sociales. Con esta campaña la consigna era clara: defender la propiedad de los terratenientes y de los grandes productores de soja en perjuicio de los sin tierras y de los pequeños productores agrícolas y justificar la represión.

El derecho a la tierra y la reforma agraria están contemplados en el artículo 114 de la Constitución Nacional, que señala: "la reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural. Ella consiste en la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación. Se adoptarán sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra; se organizará el crédito y la asistencia técnica, educacional y sanitaria; se fomentará la creación de cooperativas agrícolas y de otras asociaciones similares, y se promoverá la producción, la industrialización y la racionalización del mercado para el desarrollo integral del agro". El artículo 115 habla de las bases de la reforma agraria y el artículo 116 se refiere a la eliminación progresiva de los latifundios. El Estado también está obligado a implementar la reforma agraria a través de la Ley Nº 1.863, que crea el Estatuto Agrario.

Los referidos artículos, que favorecen a la población campesina, fueron sistemáticamente olvidados y violados por el Estado paraguayo, que ha hecho del incumplimiento de estas normas constitucionales la regla. Y no sólo no ha dado cumplimiento, además los grupos que han reclamado que se cumplan fueron catalogados y considerados subversivos, desestabilizadores y delincuentes.

Como se ha podido comprobar, las leyes y las garantías constitucionales son observadas y aplicadas unilateralmente por el Estado sólo a favor de un sector de la población, aquel que detenta el poder político y económico. El Estado paraguayo actualmente es responsable del desplazamiento y despoblamiento de varias comunidades campesinas por priorizar y proteger un modelo de desarrollo basado en el monocultivo extensivo de la soja transgénica, que destruye el ambiente, contamina cursos de agua y expulsa a los/as pequeños/as productores/as de sus fincas, acelerando la migración del campo a la ciudad. Los/as pequeños/as productores/as y los/as sin tierras, que buscan permanecer en sus comunidades y resistir a este modelo, son obligados/as a forzar el cumplimiento de la “ley” al retacearles la igualdad de oportunidades y de derechos contemplados en la Constitución.

Las organizaciones campesinas, junto con otros sectores sociales, se han constituido en los últimos tres a cuatro años en las principales opositoras a las estrategias políticas y económicas del gobierno. Por ello, son las que más duramente están siendo sometidas a la violencia estructural de un Estado y un gobierno que no promueven políticas públicas necesarias para contener y superar las grandes desigualdades sociales, que son cada vez más pronunciadas. Las prioridades político-partidarias –e incluso apetencias personalistas del presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos– se manifiestan cada vez con mayor fuerza, dejando en un plano totalmente secundario la preocupación por la crisis económica y social que aqueja a la población.

Las grandes movilizaciones de los sectores sociales y las masivas ocupaciones de tierras son consecuencias de la ineficiencia institucional del Estado. La disyuntiva que se le plantea al sector rural empobrecido es la resistencia o la migración hacia las ciudades o al exterior. Nuevamente, la migración se ha convertido en una vía de escape y oxigenación para la economía paraguaya. La desesperanza se evidencia en los/as exiliados/as económicos. Se podría decir que actualmente un rubro importante de exportación de Paraguay es su gente, y el gobierno no ha dicho nada sobre este nuevo sangrado que sufre el país.

El primer trimestre del período –octubre de 2004 a diciembre de 2004– quizás haya sido uno de los momentos de mayor conflictividad en la historia reciente de la relación entre el Estado y las organizaciones

campesinas. Desde la apertura política en 1989, el 2004 fue el año de mayor ascenso de las luchas campesinas por la tierra: se registraron 149 conflictos de tierras, 75 ocupaciones y 74 desalojos violentos y cerca de 1.500 detenidos, en un corto lapso de cuatro meses.

También marcó un punto de inflexión cuando el representante del Poder Ejecutivo pasó del doble discurso al discurso único, al asumir una postura clara en favor de los grupos económicos representados por los productores sojeros y la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la agremiación de los ganaderos. Desde entonces, la acción del gobierno fue más allá de la represión puntual de las protestas y se propuso su erradicación. Para ello, puso en práctica múltiples estrategias de contención: desde campañas que insinuaban conexiones de las organizaciones campesinas con grupos guerrilleros de otros países, pasando por la imputación a dirigentes que promueven acciones directas y llegando a la utilización de la tortura física y la extrema violencia en los desalojos.

Desde el hallazgo del cuerpo de la secuestrada Cecilia Cubas, hija del ex presidente de la República, Raúl Cubas Grau (secuestrada en septiembre de 2004 supuestamente por un grupo de izquierda y hallada muerta en febrero de 2005), cualquier hecho punible que tuviera como protagonistas a grupos delictivos se asocia con organizaciones campesinas. En este punto se debe destacar el rol jugado por los medios de comunicación, al servicio de intereses de grandes capitales, y la influencia cada vez más determinante de la política estadounidense en nuestro país.

Las consecuencias directas e inmediatas de este giro en la estrategia del gobierno es la impunidad con la que actúan los sectores favorecidos, con la evidente complicidad de la justicia, que ni investiga ni es imparcial. El caso más claro es el que ocurrió en el asentamiento Tekojoja, de Vaquería, Caaguazú, en junio de 2005, en el que un juez y una fiscal dictaminaron el desalojo de ocupantes paraguayos/as para favorecer a ocupantes brasileños, productores sojeros, en una colonia oficial del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de Tierra (Indert). Tras el desalojo fueron asesinados dos campesinos paraguayos a manos de los colonos brasileños.

Todo esto ocurre en un país cuyos gobernantes no buscan soluciones de fondo para erradicar la pobreza y no tienen un enfoque global que permita enfrentar la crisis rural en su totalidad. Mientras, el gobierno sigue haciendo alarde de un programa asistencialista de carácter clientelista y prebendario con dinero de la binacional Itaipú, despertando falsas expectativas, creando mayor dependencia y con fines claramente proselitistas.

HECHOS

En un enfrentamiento que duró algunos minutos entre efectivos de la Policía Nacional y de la Agrupación Especializada y ocupantes de la Estancia Kuape, de la empresa Urbana Inmobiliaria, en el distrito de General Resquín, San Pedro, fueron detenidos 31 ocupantes, varios resultaron con contusiones y hubo un fallecido. Al mando del operativo estuvo el jefe policial del segundo departamento, que junto con el fiscal de Santa Rosa del Aguaray, Víctor Concepción Agüero, procedieron al desalojo de los 200 ocupantes de la estancia que tiene 7.000 hectáreas. La Policía Especial de Operaciones realizó disparos al aire y al cuerpo de los ocupantes con balines de goma. Con la ayuda del carro hidrante y gases lacrimógenos dispersaron a los sin tierras. Varios de los ocupantes se refugiaron en casas vecinas o en los montes cercanos. Los efectivos irrumpieron en una casa vecina, donde detuvieron al dueño, y las hijas fueron golpeadas brutalmente por algunos antimotines por protestar por la detención que consideraban ilegal. Al término del operativo, los efectivos policiales quemaron los precarios ranchos.

Durante el procedimiento, uno de los campesinos, Aureliano Espínola García (55), se había desmayado y tras culminar el desalojo estaba reposando en una sombra al cuidado de sus compañeros. Luego empeoró su situación y fue trasladado al centro de salud de General Resquín, donde falleció minutos después a causa de un infarto de miocardio, según diagnosticó la doctora Rosa García¹.

Otro hecho resaltante fue el ocurrido en el distrito de Guayaibí, San Pedro, donde efectivos policiales destruyeron 93 viviendas de campesinos que estaban desde hacía dos años asentados en la propiedad. Los uniformados también echaron la escuela del lugar y destruyeron todo el cultivo existente. En la propiedad perteneciente a la familia Ramírez Russo estaban asentadas unas 100 familias, que fueron desalojadas y quedaron sin la posibilidad de tener siquiera qué comer ante la destrucción de sus cultivos, según expresaron los dirigentes de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc), al tiempo de repudiar la labor de la Policía Nacional. Luis Aguayo, secretario general de la organización, calificó como «fuerzas represivas de saqueo y de rapiña» a los efectivos policiales que, de acuerdo al dirigente campesino, llevaron todo lo que pudieron del asentamiento².

Los desalojos con procedimientos policiales violentos fueron la constante en el periodo analizado. Así lo demuestra otro caso que se pro-

¹ CDE. "Informativo Campesino N° 194". Asunción, noviembre de 2004.

² Ídem.

dujo en un campamento de *sintierras* en la localidad altoparanaense de San Alberto, donde tres personas resultaron heridas y otras 44 fueron aprehendidas. Cerca de 200 efectivos policiales –entre “casco azul” y Grupo Especial de Operaciones (GEO)– irrumpieron en los ranchos instalados al costado de un camino vecinal y con disparos de balines de goma y gases lacrimógenos desbarataron a los labriegos. Un grupo de *sintierras* se guareció en la escuela graduada N° 3.503, ubicada en el asentamiento María Auxiliadora, cercana al lugar donde se realizaba el desalojo. Ante esta situación, un grupo de policías rodeó la escuela, arrojó gases lacrimógenos y efectuó varios disparos con armas de fuego para intentar reducir a los labriegos. Los efectivos policiales irrumpieron en una de las aulas de la referida institución, donde cerca de 25 niños/as que estaban en plena clase quedaron en estado de shock y rompieron en llanto luego del episodio vivido. Posteriormente los policías lograron detener a los campesinos³.

En otro hecho, el ganadero brasileño Luis Ferreira de Souza contrató grupos armados, presumiblemente brasileños indocumentados, para proteger su propiedad de 270 hectáreas ubicada en la Colonia Primero de Marzo, de Villa Ygatymí, Canindeyú. Las 46 familias de esta comunidad viven atemorizadas a raíz de los constantes disparos de armas de grueso calibre efectuados por matones al servicio del ganadero Ferreira de Souza, quien públicamente manifiesta ser un protegido de fiscales, policías y jueces de la zona. Migdonio Medina, vecino del lugar, aseveró que el brasileño con sus matones realiza constantes disparos de arma de grueso calibre para facilitar el trabajo de cercado del área de la propiedad, debido a que, conforme con los datos, el inmueble fue ocupado en tres ocasiones por unas 30 familias. Los campesinos sostienen que las tierras no poseen títulos de propiedad, por lo que solicitaron la intermediación del Indert⁴.

Otro de los casos más emblemáticos de la persecución sufrida por el sector de pequeños productores es el ocurrido en el asentamiento Tekojoja, distrito de Vaquería, Caaguazú. El litigio viene desde el año 2002 y actualmente se encuentra en la instancia del Tribunal de Cuentas, que debe resolver el caso. En este asentamiento, los ocupantes paraguayos acusaron a colonos brasileños de formar grupos parapoliciales para amedrentar a las familias asentadas en la colonia y quedarse con las tierras. El Movimiento Agrario y Popular mantiene una disputa por unas tierras con un grupo de brasileños encabezado por una familia de apellido Opperman.

³ Ídem.

⁴ CDE. “Informativo Campesino N° 196”. Asunción, enero de 2005.

Según Jorge Galeano, dirigente del Movimiento Agrario y Popular, en diciembre del 2004, a pesar de no tener atribuciones y sobrepasando disposiciones del Tribunal de Cuentas, la jueza Gladys Escobar, de Caaguazú, ordenó el desalojo y quema de 46 ranchos de los campesinos.

Además, el dirigente campesino había denunciado que Ademir, Idalvo y Néstor Opperman han contratado a un equipo de civiles armados que está creando un clima de anarquía en la zona, hecho que lamentablemente se comprobó meses más tarde. Galeano expresó en más de una ocasión su preocupación por la suerte que puedan correr los numerosos niños y niñas que habitan en el asentamiento. Sostuvo que éstos se encuentran aún en estado de shock tras el desalojo producido a mediados de diciembre. Los Opperman habían comprado unas 200 hectáreas a anteriores ocupantes paraguayos, lo que resulta ilegal porque se trata de una colonia oficial. Los actuales ocupantes paraguayos –las familias paraguayas del asentamiento– buscan recuperar las tierras del poder de los brasileños, lo cual generó el conflicto⁵.

Este conflicto no tuvo una salida propicia y el 24 de junio del 2005 los ocupantes paraguayos nuevamente fueron desalojados. Del procedimiento participaron la fiscal Nelly Varela, acompañada del fiscal Pedro Torales, policías antimotines y civiles armados. En esa ocasión fueron destruidos 50 ranchos de los pobladores que llevan 3 años en estas tierras reocupadas.

El desalojo se llevó a cabo por la mañana y durante el desalojo fueron aprehendidos 24 adultos varones y un grupo de mujeres y niños, incluso bebés, que fueron derivados a la comisaría policial de Coronel Oviedo y al local de la Fiscalía.

Ese mismo día por la tarde, los campesinos Ángel Cristaldo (22) y Leoncio Torres (49) fueron asesinados con armas de fuego por los brasileños. Con los disparos resultaron también heridos Nicolás González y Aníbal González, quienes posteriormente fueron derivados a Emergencias Médicas. Los campesinos fallecidos y los heridos formaban parte del grupo de labriegos que quedó en el lugar tras el desalojo para cuidar los cultivos existentes y fueron blanco de los disparos de Opperman y sus hombres, como determinaron las investigaciones y declararon los testigos. Este ciudadano brasileño fue detenido junto a Luis Georgie Diemer (42), Leonor Rupkert (39), Luis Carlo Wonter (32), Lauren Richert (34), todos recluidos en la comisaría de Vaquería.

⁵ *Ídem.*

Fue el proceso de recuperación de las tierras el que llevó a los labriegos a insistir ante las autoridades del Indert, pero el pedido no tuvo resultado positivo. Las familias afectadas recurrieron entonces a la justicia y el desalojo fue ordenado en contra de las 70 familias, a quienes también el titular del Indert, Erico Ibáñez, había prometido los títulos de las tierras a medida que fueran pagando por cada uno de los lotes, para tratar de zanjar la situación que ya llevaba mucho tiempo⁶.

En otro hecho grave, la Coordinadora de Desarrollo Comunitario del Guairá denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el permanente ambiente de zozobra creado por los militares en el asentamiento 8 de Diciembre, de Paso Yobái, Guairá. De acuerdo a la denuncia de los dirigentes campesinos, los militares allanaron el local de la organización y se alzaron con los equipos de radio y la computadora; además, amedrentan a los vecinos de la zona. El asentamiento de 400 hectáreas fue creado en 1998 por una ley de expropiación, por la cual las tierras fueron transferidas al Instituto de Bienestar Rural (IBR) para los fines de la reforma agraria. La presencia de los militares en el lugar es a pedido de dueños de grandes propiedades, quienes temen por la ocupación de sus tierras⁷.

Estos son algunos de los hechos graves de violación de derechos humanos ocurridos en el país en el período mencionado por la falta de respuestas a los reclamos de tierra realizados por las organizaciones campesinas.

CONCLUSIONES Y MIRADA RETROSPECTIVA A LOS 10 AÑOS

En 15 años de apertura política, los problemas siguen siendo los mismos. Ninguno de los gobiernos postdictadura ha podido establecer ni una estrategia de reforma agraria ni de desarrollo rural, que pudieran resolver, en parte por lo menos, la grave crisis económica y social que se ha generado a raíz de la excesiva concentración de la tierra. Sólo actúan en base a presiones y resolviendo algunos de los conflictos más notorios.

El Indert –de reciente creación, que sustituye al IBR– es la entidad estatal responsable de ejecutar la política de tierra en el país. Varias críticas se han lanzado a la nueva institución por seguir con la misma estructura y con los mismos hombres de la anterior institución. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) también continúa con su estructura rígida y obsoleta, sin capacidad para responder a los desafíos que exige la agricultura hoy. Sigue empeñado en mantener el

⁶ CDE. "Informativo Campesino N° 201". Asunción, junio de 2005.

⁷ CDE. "Informativo Campesino N° 200". Asunción, mayo de 2005.

modelo de desarrollo agroexportador y su viejo sistema de asistencia técnica apoyando básicamente el monocultivo de algodón con escasa diversificación. Si estas dos instituciones no han podido desempeñar su función eficientemente, mucho menos pudieron lograr un trabajo coordinado con las demás instituciones para atender las necesidades en el sector rural.

En el caso particular de la tierra, que constituye el principal recurso productivo del país, el Estado no tiene una estrategia de distribución equitativa ni un plan de desarrollo rural que contemple los intereses del sector campesino en toda su diversidad. La falta de planes para el pequeño productor, la agricultura familiar, la diversificación de rubros agrícolas, la atención a las especificidades de las mujeres productoras en coordinación con otras instituciones estatales, el acceso de las mujeres al recurso productivo de la tierra, el respeto a las leyes ambientales, el combate al contrabando de productos agrícolas, entre otros, siguen siendo materias pendientes. La tierra cada vez está más concentrada en poder de pocas manos. El Estado no ha demostrado siquiera tener capacidad ni interés en recuperar las tierras malhabidas, que suman más de 11 millones de hectáreas, según la investigación hecha por el diputado Efraín Alegre.

Es de destacar que se han dado avances en la inclusión de un artículo en la Ley N° 1.863/02 del Estatuto Agrario, a favor de la mujer cabeza de familia para la adjudicación de la tierra sometida a reforma agraria, así como también la prórroga para el pago de las cuotas en 50% del plazo, cuando las adjudicatarias son mujeres. El inciso b del artículo 2 expresa textualmente: *"promover el acceso de la mujer a la propiedad de la tierra, garantizando su arraigo a través del acceso al título de propiedad, al crédito y al apoyo técnico oportuno"*.

A pesar de esta y otras leyes existentes, las políticas públicas del Estado paraguayó aún son insuficientes para promover el acceso real de la mujer a la propiedad de la tierra, garantizar su arraigo a través del acceso al título de propiedad, al crédito y al apoyo técnico. En todos los casos, ante el grave problema de acceso a la tierra, el Estado paraguayó ha implementado políticas represivas con desalojos violentos, donde también las mujeres campesinas son víctimas de tratos crueles y discriminatorios.

La consigna de las organizaciones campesinas, que sin reforma agraria no es posible el desarrollo en el país, es cada vez más patente: grandes contingentes de poblaciones campesinas se trasladan a las ciudades sin ninguna perspectiva de bienestar, debido a la saturación del mercado laboral.

RECOMENDACIONES

- Diseñar una reforma agraria integral, que permita el uso racional de la tierra, y generar incentivos necesarios para aumentar la eficiencia social derivada de este recurso y que, a su vez, garantice mecanismos para el igual acceso a hombres y mujeres a la propiedad.
- Planificar modelos de asentamientos que aseguren el arraigo de los sujetos de la reforma y garantice la no venta de las tierras a los no sujetos de la reforma agraria.
- Garantizar un modelo de producción sustentable con créditos, asistencia técnica, comercio justo y distribución planificada, organización social e industrialización. Este modelo es radicalmente diferente al modelo de desarrollo actual basado en el monocultivo y en la utilización de insumos químicos.
- Coordinar interinstitucionalmente el acceso a los servicios básicos de salud, educación, agua potable, energía eléctrica, saneamiento ambiental, caminos, transportes, comunicaciones, créditos, asistencia técnica, etc. La reforma agraria no podrá ser integral si algunos de estos servicios no son contemplados.

Derechos laborales: sin cambios significativos

Roberto Villalba

Centro de Documentación y Estudios (CDE)

En el año 2005, se observa una repetición de violaciones de los derechos de los y las trabajadores/as. A principios de este año, el nuevo viceministro del Trabajo, Rubén Sosa López, admitió -en un sinceramiento casi inusual en una autoridad de su rango- que la mayoría de los y las empleadores no registran en el ministerio a la totalidad de sus trabajadores/as para evadir el pago del seguro social al Instituto de Previsión Social (IPS). Admitió que la transgresión a las leyes laborales es una vieja práctica que perjudica los intereses del Estado y de los/as obreros/as. En esa oportunidad también se informó que más de 60 empresas de todo el país fueron multadas por el Viceministerio del Trabajo por violación de las leyes laborales.

Una breve mirada a lo que pasó en estos últimos meses nos muestra que no hubieron muchos cambios positivos para los/as trabajadores/as. Por el contrario, las condiciones de vida se siguen deteriorando progresivamente. El salario mínimo vigente no cubre ni siquiera las necesidades básicas, razón por la cual los trabajadores solicitaron a principio de año un reajuste del 24,3%. Según un estudio presentado por la Central Nacional de Trabajadores (CNT), el salario mínimo debería ser de 2.700.400 guaraníes para una familia tipo de cinco miembros.

Esta situación fue la causante de gran parte de las medidas de fuerza que ocurrieron en el transcurso del año. En su gran mayoría fueron los/as empleados/as públicos los que mayores reclamos realizaron a través de la Confederación Nacional de Funcionarios y Empleados del Estado (Confee), quienes se movilizaron para reclamar reajustes salariales de hasta 35%.

La falta de voluntad política y sobre todo la ausencia de preocupación estatal por la salud del pueblo es cada vez más notoria; reflejo de ello es que médicos, trabajadores/as y enfermeros/as han acordado realizar medidas de fuerza en distintas localidades del país. En Encarnación (Itapúa), los/as funcionarios/as del hospital exigieron un incremento del salario del 30%. Según los mismos, desde hace ocho años no reciben aumentos; en el hospital de Villarrica reclamaron aumento salarial del 35%, pago de bonificación familiar y seguro médico en forma oportuna, recategorización salarial, entre otros beneficios laborales; otros hospitales que se sumaron a las mismas reivindicaciones fueron los de San Lorenzo (Central), Santaní (San Pedro) y San Juan Bautista (Misiones).

Similar situación se vivió en el Hospital de Clínicas, donde los/as trabajadores/as llevaron a cabo una huelga en reclamo del cumplimiento de un acuerdo firmado hace dos años y que contempla beneficios laborales tales como pagos por insalubridad y bonificaciones. También los/as funcionarios/as del IPS decidieron realizar una huelga en reclamo del 9% de aumento salarial.

Las violaciones que van en contra de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras tienen varias facetas. La sobrecarga de horas de trabajo, que afecta principalmente a los choferes del transporte público, ha obligado a personas mayores a “renunciar” por las exigencias de trabajar entre 16 y 18 horas por día.

Otro sector que tuvo visibilidad durante el año fue el de la educación. El anuncio del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que a partir de este año no se permitiría la creación de secciones con docentes que no cobran sueldo ha sido un desatino para la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP). Sólo en la educación básica, que representa el 75% del sistema educativo, hubo el año pasado 3.967

educadores/as que trabajaron sin cobrar salarios del Estado. Gracias a una ampliación presupuestaria, a fin de año se pudo nombrar a 1.633 docentes y quedaron 2.334 maestros y maestras ad honorem.

Al mismo tiempo, la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) denunció el incumplimiento de los acuerdos firmados el año pasado con el MEC relacionados con beneficios salariales.

En forma paralela a los conflictos que surgieron como causa del incumplimiento de los aportes de las patronales al IPS, se sumó el intento de privatizar esta institución. Las centrales sindicales se han movilizado para protestar contra el proyecto de ley que pretende modificar la carta orgánica para establecer la jubilación de los asegurados del IPS. La idea de privatizar el ente atenta directamente contra los intereses de los/as trabajadores/as, que son los que en su gran parte, con su aporte, sostienen al ente previsional.

Se puede rescatar como hecho positivo que el Ministerio del Interior haya prometido implementar para los vendedores ambulantes organizados asistencia médica a través de un profesional dependiente de esta cartera de Estado.

SIGUEN LOS DESPIDOS

Uno de los golpes más bajos que recibe el trabajador o la trabajadora en nuestro país en este momento es sin duda el aviso de que queda sin trabajo.

Varias de las denuncias se refieren a despidos por causas político-partidarias. Se puede señalar entre las más representativas la confirmación del despido de 96 funcionarios/as contratados/as de la Municipalidad de Asunción. De persecución política también fue considerado el despido de 15 obreros de la Industria Nacional del Cemento (INC), por estar afiliados al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Distintas causas se dieron para justificar los despidos que ocurrieron en las empresas a lo largo del año. Entre los casos más llamativos estuvo el cierre de uno de los periódicos del país –el diario Noticias–, que dejó sin trabajo a 240 trabajadores/as de la empresa. Previamente se habían denunciado violaciones del contrato colectivo de trabajo, evasión del pago del seguro social, retrasos salariales, malas condiciones de trabajo, entre otras.

Al igual que años anteriores, la persecución sindical volvió a ser causal de despido. Unos 75 obreros de la empresa Azucarera Paraguaya, ubicada en Tebicuary, Guairá, fueron despedidos tras la conformación de un nuevo sindicato «por las constantes violaciones de las leyes laborales».

Pérdida de protagonismo del movimiento sindical y deterioro de las condiciones laborales marcan el final de una década

Dania Pilz

Centro de Documentación y Estudios (CDE)

En estos últimos años no se han registro avances significativos por parte del gobierno en la implementación de políticas sociales que favorezcan a los/as trabajadores/as y funcionarios/as. La tendencia que se puede ver en estos 10 años es el sistemático deterioro de las condiciones laborales, junto con el progresivo aumento del desempleo y de la pobreza, y como consecuencia la inestabilidad laboral y el crecimiento del empleo informal. A corto plazo no se visualizan soluciones. Más bien la lucha pasa por mantener los puestos de trabajo, aún cuando las condiciones van empeorando en vez de mejorar.

Las organizaciones sindicales en Paraguay históricamente se constituyeron en espacios para la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Las movilizaciones, paros y huelgas han sido y siguen siendo los mecanismos más comunes para reclamar y exigir a la patronal y al Estado mejores condiciones y el respeto a los derechos laborales garantizados en las leyes nacionales e internacionales.

Los años de dictadura bajo el gobierno del general Alfredo Stroessner (1954-1989) limitaron el derecho a la asociación, reunión y participación de los/as trabajadores/as organizados/as. “El sistema de terror instaurado tuvo como consecuencia la desmovilización de la clase trabajadora, atentando de esta manera contra la libertad de organización (art. 109, Constitución Nacional del año 1967; arts. 281 y 282, ‘Libertad sindical’, Código Laboral, 1961) y todas las reivindicaciones conquistadas hasta ese momento”¹.

Tras la caída del régimen en el año 1989, el movimiento sindical pudo volver a organizarse y desarrollar una serie de acciones impensables durante la dictadura. Sin embargo, la euforia inicial pronto se vio afectada por prácticas represivas similares a épocas anteriores: detenciones, cooptación de líderes y organizaciones sindicales e incluso corrupción del movimiento sindical. Al mismo tiempo, el crecimiento cuantitativo de sindicalizados no fue acompañado por un crecimiento cualitativo. El auspicioso incremento de sindicalizados/as registrado después del año 1989 no logró ni mantenerse ni continuar con el ritmo inicial.

La lucha por instaurar la democracia en el país no se trasladó a los organismos sindicales que, ante discrepancias, se dividieron, y como fruto de esta situación hoy se tiene seis centrales nacionales.

Asimismo, en Paraguay existe un vasto marco legal que garantiza la libertad sindical: la **Constitución Nacional**, promulgada en el año 1992, consagra varios artículos en este ámbito, entre ellos el artículo 32 “De la libertad de reunión y de manifestación”; el artículo 42 “De la libertad de asociación”; el artículo 96 “De la libertad sindical”. A la Constitución se suma el **Código Laboral**, Libro Tercero, “De las relaciones colectivas de trabajo”, Título I “De las organizaciones sindicales de empleadores y trabajadores”, Capítulo I “De la libertad sindical”, artículo 283; en el Capítulo II se regula la constitución de los sindicatos; del artículo 288 al 293 se especifican el alcance del concepto, tipos de sindicatos, sus finalidades, número de miembros necesarios para conformar un sindicato. A las normas nacionales se suman los tratados, como los **Convenios 87 y 98 de la Organización Inter-**

¹ Villalba, Roberto. “Movimiento sindical”, en “Derechos Humanos en Paraguay 1996”. Servicio Paz y Justicia – Paraguay (Serpaj-Py). Asunción, 1996.

nacional del Trabajo (OIT)² y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 8 establece el derecho a fundar sindicatos, a formar federaciones, a funcionar sin obstáculos y el derecho a la huelga. Asimismo, el **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**, en su artículo 21 consagra el derecho a la reunión pacífica y en su artículo 22, el derecho a asociarse libremente. El **Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”** establece en su artículo 8 los derechos sindicales, en tanto que la **Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)** reconoce en su artículo 16 la libertad de asociación.

Esta normativa, en la mayoría de los casos, es desconocida en la práctica, violando abiertamente los derechos consagrados bajo la mirada complaciente de las mismas autoridades, que no hacen nada para proteger la libre organización y movilización. Las denuncias presentadas ante el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) generalmente quedan archivadas o siguen procesos que duran años, desmotivando a los y las trabajadores/as.

CRECIMIENTO CUANTITATIVO INICIAL CON POSTERIOR ESTANCAMIENTO

En términos cuantitativos, la cantidad de afiliados/as a los sindicatos se incrementó considerablemente, sobre todo entre los años 1990 a 1993. Luego de estos años puede notarse un estancamiento en el número de agremiados, lo que podría considerarse hasta un retroceso. En términos cualitativos, los y las afiliados/as contaron con escasos espacios dentro de las organizaciones para su capacitación efectiva y la emergencia de nuevos liderazgos.

Haciendo un seguimiento del incremento en números de sindicalizados/as, a fines de 1988 existían 215 organizaciones sindicales activas con 20.838 afiliados/as. A principios de 1990 ya existían 402 organizaciones sindicales activas con 75.136 afiliados/as. En cuanto a la distribución por central, en 1990 coexistían tres: la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), con 22.990 socios; la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con 26.167 socios; y la Central Nacional de Trabajadores (CNT), con 9.639 socios/as. Funcionaban en forma independiente 107 sindicatos, que aglutinan a 16.349 socios/as³.

² Paraguay ratificó todos los convenios de la OIT que se refieren a derechos laborales, pero en su gran mayoría no los cumple (ver “Derechos Humanos en Paraguay” de 1996 y 1997).

³ Rodríguez, José Carlos. “La formación de una nueva clase obrera. Paraguay 1989-1990. Documento de trabajo 33”. CDE. Asunción, 1991, págs. 8 y 15.

Para el año 1992, el número de sindicalizados alcanzaba 108.761, aunque en términos cuantitativos significó un aumento considerable, apenas representaban el 7,7% de la Población Económicamente Activa (PEA) de ese entonces (1.396.733 personas)⁴. Llamativamente, ese año el mayor número de sindicalizados/as no se encontraba adherido/a a alguna de las tres centrales existentes, sino que funcionaban en forma independiente, representando el 39% de sindicalizados/as (42.054 personas). En cuanto a las centrales, a excepción de la CNT, que siguió sumando gremios y afiliados/as, las otras dos tuvieron bajas⁵.

Diez años después (2002), según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2002⁶, de la población total de 15 años de edad y más asociada a un grupo u organización, que eran 869.133 personas, pertenecían a una asociación o sindicato de trabajadores sólo 55.624 personas, el 6,4% del total. Si tenemos en cuenta al total de la PEA, 1.964.160 personas, estamos ante apenas el 3% de sindicalizados/as.

CRONOLOGÍA

Si se observan los informes de los últimos 10 años, en el año **1996** todavía se hacía una lectura optimista del sindicalismo. Se veía el crecimiento del movimiento, su capacidad de convocatoria, de movilización y de demanda al Estado. Esta situación fue deteriorándose paulatinamente y los pequeños avances en términos de mejores condiciones laborales que se lograron en la mayoría de los casos sufrieron retrocesos en la práctica, a pesar de las garantías establecidas en las leyes.

Precisamente, desde el Estado⁷ hablar de avances significa en gran medida mirar sólo los cambios legales. Así, en el informe inicial sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, presentado por el Estado paraguayo con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto⁸, en el apartado en el que se hace referencia al artículo 8 del Pacto, el Estado presenta una descripción de las principales leyes, reglamentos, convenios y pactos que garantizan el derecho a la sindicalización –mostrando incluso el aumento cuantitativo de trabajadores/as sindicalizados/as después del año 1989–, y el

⁴ Villalba, Roberto. "Movimiento sindical", op. cit.

⁵ Ídem.

⁶ Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec). "Encuesta Permanente de Hogares 2002. Principales resultados". Dgeec. Asunción, 2003.

⁷ Informe Inicial: Paraguay. 24/01/95, aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Informes iniciales presentados por los Estados Partes con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto.

⁸ Tomado de [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/E.1990.5.Add.23.Sp?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/E.1990.5.Add.23.Sp?Opendocument)

derecho a la huelga. Si sólo se observa esta información, es cierto que en los últimos años ha habido avances para el sector sindical. Sin embargo, la parte formal no ha sido acompañada por mejoras laborales y el crecimiento de fuentes de empleo. Aún cuando los y las trabajadores/as tienen garantizados los derechos a la sindicalización y movilización, en la práctica la ausencia de políticas laborales –junto con el aumento de la pobreza y el desempleo⁹– condicionan los derechos garantizados.

En el año 1996 se señalaba que en 1989 surge una línea política que reivindica la democracia y los derechos humanos, y que el movimiento sindical paraguayo fue uno de los sectores que se sintió más fortalecido con esta nueva forma de administrar el Estado.

Sin embargo, a pesar de ello, ya ese año se advertía que el Código Laboral no se cumplía en varios de sus puntos. Los trabajadores no contaban con contratos colectivos –o de otro tipo– y se veían obligados a firmar papeles en blanco. Las condiciones laborales seguían siendo deficientes: lugares de trabajo insalubres, jornada laboral superior a las ocho horas, salarios inferiores al mínimo, y la mayoría de los/as trabajadores/as no tenían un seguro médico. En algunas empresas los/as trabajadores/as eran despedidos/as por formar parte de un sindicato. Incluso, en la práctica, la clase trabajadora desconocía sus derechos explicitados en las leyes. En cuanto al MJT, se observaba poca iniciativa y control para hacer cumplir los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Alrededor del 70% de los/as asalariados/as no ganaba el salario mínimo, y aunque percibía esta suma, el salario mínimo ya entonces no cubría las necesidades básicas de una familia, generándose un desfase entre los ingresos y egresos familiares. La seguridad social se constituye en un problema sin resolución práctica, tanto el/la beneficiario/a como los familiares de los/as asegurados/as del Instituto de Previsión Social (IPS) recibían un trato y atención deficientes.

La mayor parte de los conflictos laborales registrados entre 1996 y 2001 estaba relacionado con el salario (mejoras y reajustes) y la falta e incumplimiento de los contratos colectivos, que unidos llegan a casi al 50% del total de causas de conflictos entre 1996 y 2001. A éstos se añadían el incumplimiento de las ocho horas laborales, infracción de las patronales en sus aportes al seguro social –IPS– y la negativa a abonar aguinaldos y otras bonificaciones sociales.

⁹ Para el año 2000 se calculaba que existían 1.735.000 paraguayos/as en condiciones de pobreza. Una PEA con problemas de acceso o en la calidad de empleo: 5% de desempleo abierto, 9,5% de desempleo oculto y 19% de subocupación. Un año después, la tasa de desempleo total era del 17%, mientras que la tasa de subocupación alcanzaba el 22,1%. Es decir, el 39% de la población se encontraba afectada (fuente: Dgeec. “Encuesta Integrada de Hogares (EIH) 2000/01. Principales resultados”. Dgeec. Fernando de la Mora, 2002).

En **1997**¹⁰ se resaltó la represión a los/as trabajadores/as. Ese año fueron registrados 12 casos en los que la policía actuó reprimiendo a los/as manifestantes o huelguistas.

En **1998**¹¹ el movimiento obrero sufrió persecuciones de parte de algunos empresarios, quienes no dudaron en despedir a sindicalistas y obstaculizar la posibilidad de organización sindical en sus empresas, bajo la inacción de las autoridades estatales. La mayoría de los despidos obedeció a causas relacionadas a la gestión sindical, como es el caso de aquellos que pretendieron conformar un sindicato en una empresa. La ley garantiza el derecho a la libre asociación, sin embargo puede implicar perder el puesto de trabajo.

El año **1999**¹² quedó marcado por los sucesos de marzo, que se cobraron la vida del vicepresidente de la Nación, Luis María Argaña, y siete personas que se manifestaban en las plazas frente al Congreso para exigir la destitución y juicio político al entonces presidente de la República, Raúl Cubas Grau. El movimiento sindical no estuvo ausente en esos días.

En contrapartida, **1999** fue un año de conflictos internos en las centrales, precedidos de acusaciones de corrupción y autoritarismo en el seno de las centrales y sindicatos. Se dieron hechos de enfrentamientos, confrontaciones, agresiones verbales y físicas en algunas centrales. Dirigentes obreros, integrantes de la Coordinadora Obrero Campesina (COC) conformada ese año, cuestionaron fuertemente a los principales líderes de las centrales obreras. Las crisis al interior de las centrales afectaron la imagen del sindicalismo y puede considerarse como una de las causas del debilitamiento del movimiento sindical, junto con el aumento de la pobreza y el desempleo. Un hecho que al principio se vivió como alentador fue el nombramiento del doctor Silvio Ferreira –ex sindicalista del Hospital de Clínicas– como ministro de Justicia y Trabajo. Llamativamente, ese año fueron despedidos/as 6.488 trabajadores/as por causas sindicales. La Mesa Tripartita de Diálogo Social tampoco llenó las expectativas que generó al comienzo.

En el **2000**¹³, en general, el derecho a la manifestación pacífica fue respetado por las autoridades. Los reclamos, bastante variados, tuvieron dos vertientes principales: una más política, contra autoridades del gobierno, destacándose el pedido de renuncia del presidente de la República y de las principales autoridades del gabinete, del presidente

¹⁰ Villalba, Roberto y Castro, Carlos. "Movimiento sindical", en "Derechos Humanos en Paraguay 1997". Asunción, 1997.

¹¹ Villalba Roberto y Castro, Carlos. "Movimiento sindical", en "Derechos Humanos en Paraguay 1998". Asunción, 1998.

¹² CDE. "Panorama: situación de los trabajadores sin logros positivos. Informativo Laboral N° 156". CDE, diciembre de 1999, Asunción.

¹³ Villalba, Roberto y Riquelme, Quintín. "Movimiento sindical y campesino", en "Derechos Humanos en Paraguay 2000". CODEHUPY. Asunción, 2000.

del IPS, entre otros; otra de carácter más laboral, que giró en torno a la creación de puestos de trabajo, de reactivación económica, en contra del despido de trabajadores/as, contra la “privatización salvaje” de las empresas públicas, en reclamo del cumplimiento de las ocho horas como jornada laboral, etc. Gran parte de las movilizaciones realizadas en el año 2000 estuvieron centralizadas en protestas contra el proceso privatizador que el gobierno inició con las empresas estatales.

En el **2001**¹⁴ entre las causas de los conflictos laborales figuran, en primer lugar, aquellas que se refieren al rechazo de la política económica del gobierno de ese entonces (32% del total de conflictos). El discurso coincidente al cual apeló el sector obrero e inclusive el campesino fue el posicionamiento antigubernamental en temas relacionados con la supervivencia de la mayoría de la población (salarios, salud, vivienda, tenencia de tierra y precio de productos agrícolas), lo que generó confrontaciones que fueron denominadas conflictos políticos. El cuestionamiento a la política económica y social aplicada en el país mostraba que ésta atentaba contra las condiciones de vida de la gran mayoría de la población paraguaya.

El **2002**¹⁵ fue un año marcado por crisis. Crisis política que afectó fundamentalmente al Poder Ejecutivo; económica, que impactó también en el movimiento sindical. En el primer semestre del año 2002, el MJT daba a conocer el pedido de suspensión de labores del sector de la confección, que significó el cese de 7.000 obreros/as; del sector calzado, que implicó dejar sin trabajo a unos 3.000 trabajadores/as; y del sector yerbatero, que dejó a 2.000 obreros cesantes. Los problemas relacionados con el desempleo y el bajo salario constituyeron puntos conflictivos durante todo el 2002. La privatización de empresas estatales fue uno de los focos de permanente conflicto, y en este punto cabe destacar que finalmente el Estado tuvo que parar el proceso de privatización luego de una masiva movilización que contó con el apoyo de las organizaciones campesinas.

Precisamente, gran parte de las movilizaciones realizadas en el transcurso del año 2002 tuvo como característica la multisectorialidad: campesinos, sindicalistas urbanos, mujeres, jóvenes, que salieron a protestar juntos. En este marco, el movimiento sindical volvió a tener cierto protagonismo.

¹⁴ Villalba, Roberto y Castro, Carlos. “Movimiento sindical” en “Derechos Humanos en Paraguay 2001”. CODEHUPY, Asunción, 2001.

¹⁵ CDE. “Panorama: Paraguay en crisis: sindicalismo en jaque. Informativo Laboral N° 192”, diciembre de 2002. CDE, Asunción.

El año **2003**¹⁶ fue escenario de varios hechos que en su mayoría no fueron positivos para la clase trabajadora. Ésta no cesó en la búsqueda de mejores alternativas para salir de la depresión, del desempleo y la recesión económica. Para ese año la pobreza afectaba al 48,8% de la población¹⁷ y, según índices oficiales, seis de cada 10 trabajadores/as ocupados/as no eran asalariados. Mientras tanto, continuaban los despidos tanto en el sector privado como público, afectando a un total de 3.565 personas en el transcurso del año. Paradójicamente, el 82% de los despidos se dieron en dependencias estatales. Las principales causas de las movilizaciones de los/as trabajadores/as fueron acceso a un salario digno, la falta de seguro social y el incumplimiento de contratos colectivos. En cuanto a las centrales obreras, en lo que fue el año 2003 tuvieron escasa visibilidad, su imagen continuaba desprestigiada por la poca credibilidad de los dirigentes involucrados en hechos de corrupción.

En el **2004**¹⁸ la huelga como medida de presión fue un recurso al que apelaron los/as trabajadores/as de los diferentes sectores para reclamar, exigir y protestar por las distintas arbitrariedades –tanto de la patronal del sector privado como de las autoridades de los entes públicos– resaltando el mayor número de casos registrados en dependencias del Estado, protagonizados principalmente por trabajadores/as de la educación y de la salud. Del total de huelgas realizadas y consignadas, el 80% fueron efectuadas por funcionarios/as públicos. Entre las causas aparecen, fundamentalmente, el reclamo a la restitución de puestos de trabajo y mejores condiciones salariales y laborales. Cabe destacar que en algunos casos las medidas tuvieron un tinte político-partidario. Asimismo, fueron registradas 77 manifestaciones, que tuvieron como principal causal el pedido de puestos de trabajo o restitución de ellos, el cobro de salarios y plus salarial.

En el 2005 continuaron las medidas de presión a través de huelgas y paros. En los últimos meses del año trabajadores estatales –sobre todo de los sectores de salud y educación– iniciaron una serie de movilizaciones en reclamo de mayor presupuesto para estas áreas.

¹⁶ CDE. “Panorama: muchas pobreza, pocos cambios. Informativo Laboral N° 198”, noviembre-diciembre 2003. CDE, Asunción.

¹⁷ Dgeec. “Encuesta Permanente de Hogares 2002”. Dgeec, Asunción.

¹⁸ CDE. “Panorama: funcionarios estatales los más afectados por los conflictos laborales. Informativo Laboral N° 204”, noviembre-diciembre de 2004. CDE, Asunción.

AVANCES LEGALES SIN INCIDENCIA EN LA PRÁCTICA

El movimiento sindical fue perdiendo protagonismo con el correr de los años. Las condiciones laborales de los y las trabajadores/as fueron deteriorándose año tras año, y las causales de los principales conflictos fueron el reclamo por mejores salarios, la negativa de la patronal a firmar contratos colectivos, el despido de trabajadores/as, algunos/as incluso con estabilidad laboral o sindical. Con todas las garantías legales existentes, la conformación de un sindicato puede constituirse en motivo de despido de los/as trabajadores/as. Por lo tanto, el derecho a la conformación de sindicatos no se encuentra vigente para el trabajador y la trabajadora, haciendo que sea más difícil reclamar otros derechos, como mejores condiciones laborales, el acceso a un salario digno, el seguro social, las vacaciones, entre otros.

Como se consignó, no sólo el sector privado fue escenario de conflictos laborales, también el sector público, donde las propias autoridades violan los derechos laborales.

Al tiempo que, en estos últimos años, no se han registrado avances significativos por parte del gobierno en la implementación de políticas sociales que favorezcan a los/as trabajadores/as y funcionarios/as.

La tendencia que se puede ver en estos 10 años es el sistemático deterioro de las condiciones laborales, junto con el progresivo aumento del desempleo y de la pobreza, y como consecuencia la inestabilidad laboral y el crecimiento del empleo informal. A corto plazo no se visualizan soluciones. Más bien la lucha pasa por mantener los puestos de trabajo, aún cuando las condiciones van empeorando en vez de mejorar.

Participación Ciudadana¹: las organizaciones sociales coparon el escenario nacional

*Laura Bareiro,
Decidamos, Campaña por la Expresión Ciudadana*

Las protestas ciudadanas siguen siendo la llave para la conquista de reivindicaciones en las organizaciones sociales, y este año tuvieron una presencia importante en el espacio público, con una gran variedad de repertorios de acción. Si bien se registra un contexto de libertades públicas para la asociación y manifestación, la llamada criminalización de las protestas sociales sigue siendo una constante, sobre todo por las represiones policiales a las acciones colectivas llevadas a cabo por organizaciones sociales y las aperturas de procesos penales a sus líderes por parte del Ministerio Público.

¹ El presente capítulo presenta datos elevados por la CODEHUPY al Comité de Supervisión del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (Comité de Derechos Humanos) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Informe Sombra presentado durante su 85° periodo de sesiones.

² Para completar la visión ofrecida en este capítulo, se recomienda además leer el análisis socio-político y económico, y los capítulos sobre movimiento sindical, movimiento campesino y derechos políticos de este informe.

MARCO LEGAL

En relación al año 2004, el marco legal existente en relación al derecho a la asociación y al derecho a reunión y manifestación no ha sufrido cambios, vale decir que se encuentra amparado en la Constitución Nacional.

Como fue mencionado en informes anteriores, el derecho a la asociación está reconocido básicamente en dos artículos: primero, en el artículo 42³, que reconoce además del derecho a la asociación, el derecho a no ser obligado a pertenecer a una asociación determinada; y segundo, en el artículo 119, que incorpora exigencias a las organizaciones intermedias, políticas, sindicales y sociales y obliga a que funcionen en base a las reglas del sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.

Con respecto al derecho a la reunión y manifestación, el artículo 32⁴ de la Constitución Nacional establece el derecho de las personas a reunirse y manifestarse, sin necesidad de permiso, con derecho a no ser obligadas a participar, especificando que la ley sólo reglamentará su ejercicio en lugares de tránsito público, horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público.

Tampoco las regulaciones de estos derechos han sufrido cambios durante el 2005. En relación a la asociación existen regulaciones para las asociaciones de vecinos y vecinas de un barrio o sector, llamadas comisiones vecinales y reguladas por la Ley Nº 1.294/87 Orgánica Municipal; para las asociaciones estudiantiles, llamadas en general centros estudiantiles, están las regulaciones de la Ley General de Educación Nº 1.264/98, que en su artículo 125 establece el derecho a integrar libremente asociaciones, cooperativas, clubes, centros estudiantiles u otras organizaciones comunitarias legalmente constituidas.

Apreciaciones sobre el marco legal

Abordando las libertades de reunión y manifestación, y tomando como marco jurídico conceptual del presente informe instrumentos jurídicos internacionales, observamos que éstas se hallan garantizadas por el derecho internacional de los derechos humanos en un amplio universo comprensivo además de la Declaración Universal y Americana de

³ Artículo 42. De la libertad de asociación. Toda persona es libre de asociarse o de agremiarse con fines lícitos, así como nadie está obligado a pertenecer a determinada asociación. La forma de colegiación profesional será reglamentada por ley. Están prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

⁴ Artículo 32. De la libertad de reunión y de manifestación. Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La ley sólo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley.

Derechos Humanos (artículos 20⁵ y 21⁶, respectivamente), también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 21) y de nuestro principal instrumento regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁷, de los cuales, en conjunto, emergen estándares o márgenes de interpretación de dichas libertades.

A la luz de dichos estándares internacionales, debemos empezar diciendo que las restricciones impuestas por la Ley N° 1.066/97 “Que reglamenta el artículo 32 de la Constitución Nacional⁸”, y que han venido siendo reiteradas en anteriores informes de CODEHUPY, invalidan a la manifestación como mecanismo de participación y de introducción de temas en la agenda pública. El tiempo en que las personas pueden manifestarse establece un horario en que el impacto que se espera que produzca una manifestación (conseguir captar la atención de la ciudadanía y hacerles conocer de esta manera sus reclamos, presentar sus quejas a las autoridades directamente responsables en el horario en que desempeñan sus funciones) resulta irrelevante. Además, a partir del horario permitido para manifestarse, los medios de comunicación masiva se encuentran cerrando sus ediciones, con lo que tampoco se logra una adecuada cobertura periódica de las manifestaciones. Por otro lado, la manifestación no puede ser considerada libre si la ley restringe los lugares permitidos para ser realizadas.

En general se observa que, si bien las convenciones internacionales y regionales de derechos humanos autorizan a que los Estados impongan ciertas restricciones a la libertad de reunión y manifestación por razones de orden público, en una democracia dicha autorización dada al Estado no puede extenderse a inhibir el ejercicio de la libertad de reunión y manifestación, como sucede en Paraguay a causa de reglamentaciones de interferencia arbitraria (véase Ley N° 1.066/97), de la brutalidad en el uso de la fuerza pública (véase represión a movilizaciones campesinas) y por políticas judiciales que criminalizan la protesta social.

En tal sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su órgano judicial de supervisión, la Corte Interamericana, proveen las pautas para definir las restricciones admisibles al goce y ejercicio de

⁵ Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

⁶ Artículo 21. Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole.

⁷ Artículo 15. Derecho de reunión. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

⁸ Tomado de www.leyes.com.py/todas_disposiciones/1997/leyes/ley_1066_97.htm

estos derechos, a saber: a) deben estar establecidas por ley; b) deben ser necesarias; c) deben ser proporcionales; y d) deben hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática.

El artículo 15 de la Convención dispone que “(...) el ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás (...)”. La necesidad de las restricciones legalmente contempladas dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, siendo insuficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno (por ejemplo, *mantener el orden público*). La proporcionalidad radica en que la restricción debe ajustarse estrechamente al logro de un legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho restringido. Finalmente, para que sean compatibles con la Convención, las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad del pleno goce del derecho restringido⁹.

En relación al derecho a la asociación, la normativa en el caso de las denominadas *organizaciones vecinales* también presenta una limitación irrazonable a las garantías de autonomía y participación constitucionales, basada en un marco legal obsoleto, la Ley Nº 1.294/87 “Orgánica Municipal”¹⁰, de carácter centralista y autoritario, heredado de la dictadura militar.

En dicha ley, las y los vecinos que deciden asociarse para fines de desarrollo de su comunidad son definidos en cuanto sujeto colectivo, como organismos auxiliares y dependientes del Ejecutivo municipal, careciendo de autonomía política y financiera. La norma establece atribuciones que dejan en manos del intendente la posibilidad de reconocimiento, intervención y disolución de las organizaciones, y por otro lado establece mecanismos de conformación y funcionamiento más eficaces como mecanismos de control que de estímulo a la organización y participación vecinal.

Como ha venido sosteniendo CODEHUPY en varios de sus informes anuales, estas disposiciones imposibilitan la autodeterminación de la organización vecinal y su participación en el municipio si, finalmente, ésta depende de la voluntad de las autoridades municipales, o también coarta las iniciativas de la ciudadanía de organizarse aún sin la autorización de las autoridades municipales, por la dificultad que se

⁹ Cfr. (*mutatis mutandi*) caso *Yakye Axa*, caso *Ricardo Canese*, caso *Herrera Ullao*, caso *Ivcher Bronstein*.

¹⁰ Tomado de www.leyes.com.py/todas_disposiciones/1987/leyes/ley_1294_87.htm

crea en la articulación de actividades conjuntas para resolver los problemas en los municipios. Dichos informes han mencionado reiteradamente la necesidad de modificar estos artículos en la Ley Orgánica Municipal.

Al respecto, es de traer a colación que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha sostenido en su Observación General Nº 25 que los ciudadanos y ciudadanas también participan en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate y el diálogo públicos con sus representantes y gracias a su capacidad para organizarse. Esta participación se respalda garantizando la libertad de expresión, reunión y asociación¹¹.

Sobre este mismo particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) ha sostenido que puede considerarse que se viola la libertad de asociarse si los fines propuestos de tal asociación son de aquellos que podrían cumplirse por asociaciones creadas por los individuos al amparo de su libertad de asociación, sin necesidad de una ley que no se limita a tolerar o permitir su existencia, sino que crea la corporación, la regula en su organización y administración y hace obligatorio, para quien quiera ejercitar sus fines, pertenecer a ella, lo que significa que crea restricciones a la libertad de asociación¹².

Así también, en el caso de los centros estudiantiles, si bien desde hace algunos años ha aumentado la cantidad de centros estudiantiles en las instituciones educativas, aún se observa que los y las estudiantes se encuentran con el rechazo (en algunos casos explícito, en otros no) de las autoridades de las instituciones educativas en el momento de iniciar los procesos para la conformación de sus centros. Otros casos observados en relación a este punto es la intervención de las autoridades de los colegios en la determinación del perfil de los y las estudiantes candidatados/as a dirigentes de las organizaciones estudiantiles; este hecho limita la autonomía de los centros estudiantiles.

La ley ya citada que regula la materia, establece que las organizaciones estudiantiles de educación escolar básica y media se regirán por estatutos aprobados por las autoridades de la institución. La falta de claridad de este artículo en relación a los criterios de aprobación hace que sea utilizado como un mecanismo para mantener el control de las organizaciones o para impedir su conformación (art. 127)¹³.

¹¹ Ítem 8; 57º período de sesiones (1996).

¹² Corte IDH. "La colegiación obligatoria de los periodistas (arts. 13 y 29, Convención Americana sobre Derechos Humanos)". Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A, Nº 5, párrs. 7-12.

¹³ En varios colegios se siguen registrando dificultades para conformar sus centros estudiantiles, entre ellas debido a la aplicación de este artículo.

EJERCICIO DEL DERECHO A LA REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN

Docentes

En junio del año pasado, la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP) amenazó con interrumpir el término de las clases o afectar el inicio en el 2005, en una medida que sería tomada en función al presupuesto asignado al sector¹⁴. A su vez, en el congreso extraordinario de la Unión Nacional de Educadores (UNE), realizado en noviembre del 2004, se resolvió no iniciar las clases en febrero del 2005¹⁵.

Por su parte, la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) había anunciado una huelga para el 8 de noviembre, en el marco de las negociaciones con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), exigiendo la modificación del proyecto del presupuesto 2005 y solicitando a la secretaría de Estado que acompañara al sindicato en la propuesta de introducir la pirámide salarial ante el Congreso¹⁶. Estas negociaciones no tuvieron mucho éxito y desde el lunes 8 de noviembre del 2004 los docentes de la FEP iniciaron la huelga que continuó hasta el 15 de noviembre del 2004.

Tanto la UNE como la FEP realizaron una huelga desde mediados de junio del presente 2005; la medida fue realizada por no llegar a acuerdos con el MEC, que pretendió dar un aumento del 5% del salario frente al 15% que planteaban los gremios¹⁷.

Estudiantes secundarios

En octubre del año pasado, estudiantes del colegio Bernardino Caballero de Itá se manifestaron frente al MEC para plantear su apoyo al director interino, quien durante tres años ocupó el cargo sin ser nombrado, y luego perdió la autoridad en la institución¹⁸.

En noviembre del año 2004, más de 20 jóvenes integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) se manifestaron frente al Palacio de López, sede central del Poder Ejecutivo, para exigir el veto a los cambios propuestos a la Ley N° 1.432/99 "Que modifica y amplía la Ley N° 384/94 'Que establece el boleto estudiantil'"¹⁹.

¹⁴ Diario Última Hora, 6 de octubre de 2004, pág. 22.

¹⁵ Diario Última Hora, 3 de noviembre de 2004, pág. 19.

¹⁶ Diario Última Hora, 4 de noviembre de 2004, pág. 21.

¹⁷ Diario Última Hora, 12 de junio de 2005, pág. 22.

¹⁸ Diario La Nación, 15 de octubre de 2004, pág. 32.

¹⁹ Diario La Nación, 24 de noviembre de 2004, pág. 24. Para acceder al texto de la ley puede visitarse el sitio <http://www.senado.gov.py/ups/leyes/8511432.doc>

En abril de este año, la Fenaes organizó una “*acostata*” en la parada de la terminal de los ómnibus de la línea 37. Con carteles que decían “*En este lugar no se apoya la educación*” cerraron el acceso principal de la parada, exigiendo respeto a los derechos y a la vida, el cumplimiento de la ley del boleto estudiantil en particular, y la indemnización a un estudiante que sufrió una fractura de pelvis al caer de un ómnibus de dicha línea²⁰.

En mayo de este año, estudiantes de la Fenaes del departamento de Alto Paraná se manifestaron denunciando la violación de la ley del boleto estudiantil²¹. También en mayo de este año estudiantes secundarios protestaron frente al MEC y a diferentes colegios nacionales de la capital y el departamento central por las modificaciones en el sistema de evaluación²².

A principios de junio del 2005, la Fenaes realizó una manifestación, cuya concentración se realizó en la plaza Italia de Asunción, desde donde marcharon hasta el MEC. Los argumentos que se dieron desde la federación fueron que no estaban dadas las condiciones para la aplicación del nuevo sistema de evaluación debido a la falta de comunicación efectiva tanto a docentes como a estudiantes y que la evaluación es subjetiva porque puede ser manipulada por los docentes, quienes en muchos casos no tienen prácticas democráticas en las aulas, entre otros argumentos²³.

En agosto de este año, en relación al precio del pasaje, estudiantes aglutinados en la Fenaes se manifestaron frente a la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana y Asunción (Setama)²⁴ exigiendo la reducción a 1.700 guaraníes²⁵.

Estudiantes universitarios

Representantes del *Frente en Defensa de la Universidad Nacional y el País* mantuvieron una reunión en octubre del 2004 con diputados y senadores de la Comisión Bicameral del Presupuesto para abordar el plan de reducción del arancel universitario. “Arancel cero” en todas las facultades fue lo que manifestaron los representantes a partir de la necesidad de igualar realmente las condiciones para salir adelante e integrarse al campo vocacional y laboral²⁶.

²⁰ Diario Última Hora, 9 de abril de 2005, pág. 24.

²¹ Diario La Nación, 13 de mayo de 2005, pág. 43.

²² Diario La Nación, 24 de mayo de 2005, pág. 43.

²³ Diario Última Hora, 9 de junio de 2005, pág. 22

²⁴ Tomado de <http://www.setama.gov.py/>

²⁵ Diario Popular, 6 de agosto de 2005, pág. 5.

²⁶ Diario Abc Color, 11 de octubre de 2004, pág. 24.

En noviembre del año pasado dirigentes estudiantiles de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) pidieron al presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, el respaldo gubernamental para aprobar el presupuesto 2005 con las ampliaciones solicitadas por las autoridades universitarias. Además solicitaron la modificación del artículo 37 de la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2005, referente al incremento de aranceles de acuerdo a los índices de precios al consumidor, que consideran una de las causales del incremento de los aranceles universitarios, además de otras reivindicaciones²⁷.

El 11 de mayo de este año, a partir de la decisión de modificar los estatutos para permitir la reelección por más de un período consecutivo (reelección indefinida) del rector y decanos de la UNA, en la asamblea universitaria se desató una crisis: alumnos de varias facultades se manifestaron frente al aula magna de la Facultad Politécnica, donde se llevaba a cabo la asamblea. Los y las estudiantes cerraron la salida a los participantes de la asamblea, generando presión para negociar con las autoridades²⁸. Fueron reprimidos por fuerzas antimotines de la Policía Nacional (*cascos azules*). La fiscalía a cargo de la investigación ordenó la detención de María Paz Valenzuela, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía; de Andrés Parra, estudiante de Filosofía; y de Arnulfo Encina Rojas, docente de Ciencias Agrarias²⁹, quienes fueron sindicados como responsables del delito de privación de libertad de 62 miembros de la asamblea universitaria.

En respuesta al hecho anterior, estudiantes de las Facultades de Filosofía, Trabajo Social y Ciencias Políticas, miembros de la Coordinación de la Asamblea Permanente de Estudiantes de la UNA, marcharon en manifestación desde la Facultad de Filosofía y luego realizaron un acto simbólico de protesta frente al Ministerio Público exigiendo el sobreseimiento de los detenidos que, como señaláramos, fueron imputados por privación ilegítima de libertad de las personas que participaban de la asamblea universitaria, en el campus de San Lorenzo³⁰.

Niños/as y adolescentes trabajadores

En marzo de este año, el Frente por la Defensa y Vigilancia de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, integrado por varias organizaciones y por la Coordinadora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, se manifestó con la consigna de no estar de acuerdo con la respuesta militarizada del gobierno a la pobreza y su

²⁷ *Diario La Nación*, 18 de noviembre de 2004, pág. 31.

²⁸ *Diario Abc color*, 12 de mayo de 2005, tapa.

²⁹ Vide www.abc.com.py/articulos.php?fec=2005-05-13&pid=178502&sec=3

³⁰ *Ultima Hora*, 27/05/05, pág. 20.

desacuerdo con el plan en el área de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA)³¹.

En junio de este año, niños, niñas y adolescentes trabajadores marcharon por las calles de Asunción concentrándose luego en la plaza Juan E. O'leary. Manos atadas simbolizando la falta de fuentes de trabajo en que ocuparlas y bocas vendadas con telas negras representando la falta de oportunidad para hacer escuchar sus voces fueron algunas de las formas que usaron para manifestar sus quejas al gobierno³².

Organizaciones de afectados por el incendio del Ycuá Bolaños

Durante el año 2005, realizaron una gran cantidad de acciones colectivas de protesta, reclamando en relación a la impunidad que envuelve todo el proceso judicial sobre la responsabilidad del incendio del supermercado Ycuá Bolaños.

Así, durante todo el año la *Coordinadora de Víctimas y Familiares y Personas Amigas de afectados de Ycuá Bolaños* continuó realizando las jornadas en memoria de las víctimas del incendio, como ya fue mencionado en el informe del 2004.

En febrero de este año, dicha coordinadora solicitó también justicia la renuncia al cargo del intendente de la ciudad de Asunción, Enrique Riera, y además sus integrantes sembraron cruces y fotos de los seres queridos en los jardines de la Municipalidad de Asunción³³. En abril, al conocerse la resolución judicial que favorecía a uno de los dueños del supermercado, imputado como responsable del incendio del supermercado, con reclusión domiciliaria, familiares y víctimas se manifestaron frente al domicilio del imputado, exigiendo su traslado al penal de Tacumbú³⁴.

En agosto, a un año del incendio del supermercado Ycuá Bolaños, se realizaron marchas reclamando justicia y pedidos de condena para los responsables de la tragedia³⁵.

Organizaciones de mujeres

El 24 de febrero de 2004, en el Día la Mujer Paraguaya, y con organización del Departamento Mujer del Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahura, mujeres de distintos puntos del país se reunie-

³¹ *La Nación*, 11/03/05, pág. 42.

³² *Ultima Hora*, 25/06/05, pág. 23.

³³ *Diario Abc Color*, 2 de febrero de 2005, tapa.

³⁴ *Diario Abc Color*, 13 de abril de 2005, pág. 55.

³⁵ *Diario Abc Color*, 1 de agosto de 2005.

ron en la plaza Italia. El énfasis del debate se centró en el aislamiento de las mujeres pobres en los procesos políticos de su comunidad, la discriminación y explotación, además de reclamar la situación de las políticas de salud³⁶.

A su vez y en conmemoración al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre del 2004 mujeres organizadas del departamento de San Pedro, integrantes del Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahura, realizaron una marcha desde la misma plaza hasta el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para denunciar la falta de políticas de Estado que permitan el acceso de familias pobres a los servicios de salud, además de denunciar una serie de atropellos a los derechos de la mujer y reclamar al Estado una política clara de mejoramiento de la cobertura sanitaria en el área materno-infantil³⁷. En el mismo día diferentes organizaciones no gubernamentales y sociales realizaron actividades diversas: manifestaciones, paneles, *pintatas*, teatro y música para recordar este día³⁸.

Finalmente, en marzo de este año, con el motivo de conmemorar del Día Internacional de la Mujer, se realizaron varias actividades como paneles, ciclos de cine, teatro, lanzamiento de informes y una marcha³⁹.

Organizaciones campesinas

Seguidamente se presentan algunas de las manifestaciones realizadas por las organizaciones campesinas en el país, que son el sector organizado de la población que más se ha manifestado en el 2005, como también en años anteriores, en reclamo por sus derechos⁴⁰.

En el mes de diciembre del año 2004, grupos de adherentes de la Federación Nacional Campesina (FNC) realizaron manifestaciones en varios puntos del país con el objetivo de apoyar las ocupaciones de tierras realizadas por los *sinttierras*, además de analizar la situación de Odilón Espínola, dirigente de esa organización que es perseguido por la justicia⁴¹.

También en diciembre del año pasado, en la plaza Libertad de Villarrica, campesinos de la FNC se convocaron con las demandas de conseguir tierra propia, asistencia crediticia y por el retorno de los militares a sus cuarteles, además de la liberación de compañeros de San Juan Nepomuceno⁴². En San Estanislao también se realizaron movilizaciones.

³⁶ Diario Última Hora, 25 de febrero de 2004, pág. 31.

³⁷ Diario Abc Color, 24 de noviembre de 2004, pág. 24.

³⁸ Diario Última Hora, 26 de noviembre de 2004, pág. 36.

³⁹ Diario Abc Color, 7 de marzo de 2005, pág. 32.

⁴⁰ Para más información, leer capítulo sobre movimiento campesino.

⁴¹ Diario Última Hora, 4 de diciembre de 2004, pág. 8.

⁴² Diario La Nación, 7 de diciembre de 2004, pág. 6.

Hay 14 labriegos desaparecidos tras la violenta represión en Guayaybí (San Pedro).

Otra manifestación de la FNC se realizó en cruce Tacuara (Santaní), sobre la ruta 3 “Gral. Aquino”. La medida consistió en un bloqueo de media calzada protagonizado por 2.000 campesinos, que fueron dispersados por orden fiscal. Una de las reivindicaciones fue una vez más el retiro de la orden de captura de Odilón Espínola, secretario general de esa organización⁴³. Simultáneamente y por el mismo motivo, doscientos campesinos de la FNC provenientes de la zona de Guairá cerraron rutas en determinadas horas del día al costado de la ruta 8 “Blas Garay”, a la altura de Mbocayaty.

Por último, y en ocasión de la audiencia pública llevada a cabo por la CODEHUPY para evaluar la gestión del anterior fiscal general del Estado, Oscar Latorre, realizada en el Parlamento Nacional en julio de este año, campesinos y campesinas del distrito Vaquería, con tapabocas y atados de manos, manifestaron que son atropellados en sus derechos y torturados durante la intervención judicial y policial de las que fueron víctimas. Además protestaron por el uso de agrotóxicos y el desempeño del fiscal general⁴⁴.

Organizaciones de trabajadores

En noviembre del 2004, obreros de la Municipalidad de Asunción iniciaron una huelga reclamando el 20% de aumento salarial, con la amenaza de paralizar los servicios básicos de la ciudad. Los obreros municipales también realizaron una marcha para exigir sus reivindicaciones⁴⁵.

En diciembre del 2004, funcionarios públicos del Ministerio de Salud se manifestaron cerrando la avenida Pettrossi, reclamando la apertura de una mesa de diálogo con las autoridades de la secretaría de Estado debido al no pago del seguro médico y del salario de unos 7.000 contratados⁴⁶.

En febrero de este año, como respuesta al cierre del diario Noticias, trabajadores de este medio que quedaron sin trabajo se manifestaron frente a la oficina del dueño del diario en reiteradas ocasiones⁴⁷.

El 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajador/a, centrales obreras, sindicatos, frentes campesinos y sectores ciudadanos se manifesta-

⁴³ Diario Última Hora, 15 de diciembre de 2004, pág. 21.

⁴⁴ Diario Última Hora, 23 de julio de 2005, pág. 22.

⁴⁵ Diario Abc Color, 14 de noviembre de 2004, pág. 30.

⁴⁶ Diario La Nación, 30 de diciembre de 2004, pág. 40.

⁴⁷ Diario Última Hora, 12 de febrero de 2005, pág. 22.

ron frente al Panteón de los Héroes denunciando desempleo, violación a derechos laborales, y responsabilizaron al gobierno de esta crisis social⁴⁸.

Enfermeras del Hospital de Clínicas pararon dos días sus actividades exigiendo vacaciones y pago del 100% extra por trabajar feriados y domingos. Este hecho ocurrió en agosto de este año⁴⁹.

El Sindicato de Enfermeras del Hospital de Clínicas, médicos y estudiantes marcharon en julio para pedir el cambio del decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Los y las manifestantes aclararon que no están de acuerdo con asignar rubros en la universidad que no estén destinados a paliar la falta de insumos y medicamentos para el hospital⁵⁰.

Organizaciones de gays, lesbianas y transgéneros

Con el lema “Una ciudadanía diversa merece un país seguro”, el Grupo de Acción Gay, Lésbico y Transgéneros (Gaglt) organizó una semana de actividades en el marco del Día Internacional del *Orgullo Gay*, celebrado el 28 de junio, culminado la con una marcha por la reivindicación de sus derechos que terminó frente al Panteón de los Héroes⁵¹.

Antiprivatización

Campesinos y campesinas, trabajadores y trabajadoras y funcionariado de empresas privadas y públicas, además de varias organizaciones sociales, se manifestaron esperando el rechazo de la ley de privatización que se trataba en el Congreso Nacional, festejando frente al mismo la no aprobación de dicha ley. Este hecho ocurrió en julio de este año⁵².

Campaña paraguay sin excusas contra la pobreza

En junio de este año, en el marco del Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza, varias organizaciones sociales que conforman la campaña “*Paraguay sin excusas contra la pobreza*” realizaron una acción en el centro de la ciudad de Asunción, frente al Panteón de los Héroes. Consistió en repartir volantes e información y recoger inquietudes de las y los ciudadanos para plantear a la XVIII Cumbre del Mercosur, que se realizó en Asunción. La exigencia consistía en una *integración sin pobreza, ni desigualdad*⁵³.

⁴⁸ Diario Última Hora, 2 de mayo de 2005, pág. 6.

⁴⁹ Diario Abc Color, 4 de agosto de 2005.

⁵⁰ Diario Última Hora, 27 de julio de 2005, pág. 23.

⁵¹ Diario Última Hora, 3 de julio de 2005, pág. 31.

⁵² Diario Abc Color, 1 de julio de 2005, pág. 7.

⁵³ Diario La Nación, 19 de junio de 2005, pág. 8.

En julio de este año, unas 150 personas de esta misma campaña desplegaron carteles frente a la Embajada de los Estados Unidos, en contra de la deuda externa, con motivo de la reunión de los países más industrializados del mundo⁵⁴.

OTRAS MANIFESTACIONES

La marcha denominada “Juntos por la vida y la esperanza”, convocada por la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, fue realizada en octubre del 2004. La marcha partió desde el gimnasio “León Condou” hasta la Catedral Metropolitana con el objetivo de entregar al presidente de la República, Nicanor Duarte, y al presidente del Congreso, Miguel Carrizosa, un mensaje en relación a sus responsabilidades como gobernantes⁵⁵.

En noviembre de 2004, vecinos de Capiatá que fueron afectados por el derrame de agrotóxicos producido en noviembre del año pasado, se reunieron para conformar una coordinadora a fin de dar consistencia a las demandas planteadas en torno al tema⁵⁶.

En diciembre del 2004, integrantes de la Fundación Vencer, que nuclea a personas que trabajan en relación a las personas que viven con VIH/Sida, se manifestaron frente al Instituto de Medicina Tropical exigiendo al mismo una política clara para la prevención del contagio de la enfermedad y la provisión de medicamentos a los infectados⁵⁷.

En marzo del 2005, integrantes de varias organizaciones sociales se manifestaron frente a la residencia presidencial para protestar contra la respuesta militarizada del gobierno a los conflictos sociales y la tendencia a criminalizar las luchas sociales, recordando el Día Mundial en contra de la Guerra y recordando que la guerra interna en Paraguay es esa: la llamada criminalización de las luchas sociales⁵⁸.

En abril de este año, en el marco del Día Mundial de la Salud, el Movimiento Nacional de Defensa de la Salud se manifestó frente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social exigiendo el cumplimiento del derecho a la salud y la implementación de políticas de salud pública⁵⁹.

⁵⁴ *Diario Abc Color*, 2 de julio de 2005, pág. 9.

⁵⁵ *Diario Última Hora*, 21 de octubre de 2004, pág. 6.

⁵⁶ *Diario La Nación*, 17 de noviembre de 2004, pág. 31.

⁵⁷ *Diario Abc Color*, 2 de diciembre de 2004, pág. 28.

⁵⁸ *Diario La Nación*, 20 de marzo de 2005, tapa.

⁵⁹ *Diario Última Hora*, 4 de abril de 2005, págs. 18 y 19.

Unas 100 amas de casa bloquearon la avenida Artigas en señal de protesta por la suba del precio del gas licuado de petróleo de uso doméstico en mayo de este año⁶⁰.

Aproximadamente 400 pobladores/as de Puerto Casado, después de una marcha que duró varios días, llegaron a la ciudad de Asunción para exigir a las autoridades la expropiación de 52 mil hectáreas de tierras de Victoria SA, propiedad de la secta Moon, que posee casi 600 mil hectáreas en esa zona. Esto sucedió en julio del 2005⁶¹.

En agosto de este año, ciudadanos y ciudadanas se manifestaron frente al Ministerio de Industria y Comercio debido a la posición de la viceministra en contra de la venta de gas licuado en las estaciones de servicio. Los y las manifestantes llegaron al ministerio en carritos, y animaron la protesta con cacerolas⁶².

También en agosto de este año, la Coordinadora de Lucha Ciudadana convocó a una manifestación que se realizó en la Plaza de la Democracia. El motivo fue protestar por la suba de tarifas de los servicios básicos y reclamar la reducción de precios del gasoil y el pasaje urbano⁶³.

Una gran cantidad de personas pertenecientes a organizaciones sociales, convocadas por el Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-PY) y el Movimiento Objeción de Conciencia – Paraguay (MOC-PY), se manifestaron frente al Panteón de los Héroes contra la visita del Secretario de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Rumsfeld, y la presencia de tropas norteamericanas en territorio paraguayo. Este hecho ocurrió en agosto del 2005⁶⁴.

A estas manifestaciones se suman otras movilizaciones y protestas, como la de los jubilados bancarios, de los frentes antiprivatistas y choferes de ómnibus de pasajeros que quedaron sin trabajo por el cierre de concesiones a líneas de transporte y otros.

Este fue un año de mucha movilización ciudadana, que se destacó por una variedad de repertorios de acción colectiva, que si bien ya se habían presentado en otros años, tomaron mucho más fuerza en este.

⁶⁰ *Diario Última Hora*, 11 de mayo de 2005, pág. 16.

⁶¹ *Diario La Nación*, 20 de julio de 2005, pág. 2.

⁶² *Diario Popular*, 6 de agosto de 2005, pág. 5.

⁶³ *Diario Abc Color*, 11 de agosto de 2005.

⁶⁴ *Diario Abc Color*, 17 de agosto de 2005.

CASOS DE DENEGACIÓN DEL DERECHO DE MANIFESTACIÓN

Represiones en algunas de las movilizaciones

En diciembre del 2004, en los desalojos en la localidad de Guayaybí, departamento de San Pedro, varios campesinos salieron heridos por armas de fuego, balas de goma o golpes. Según dirigentes de la FNC, los efectivos de la Policía Nacional retuvieron a los heridos y sus acompañantes impidiendo que de inmediato sean asistidos, quebrantando normas internacionales⁶⁵. Además expresaron sus quejas a los parlamentarios de la Comisión de Crisis y Derechos Humanos que visitaron el lugar, respecto a las destrucciones que policías y militares ocasionaron en las casas de los campesinos.

También en diciembre del 2004, manifestantes campesinos de la FNC sufrieron una represión en Caaguazú que dejó 46 detenidos y 15 heridos. Las fuerzas policiales cargaron contra los manifestantes cuando intentaron marchar sobre una parte de la calzada de la ruta 7 para trasladarse hasta el mercado de la ciudad, para repartir volantes y pedir alimentos, a la altura del km. 179. La intención era marchar pacíficamente por la media calzada de la avenida con el objetivo de realizar una “*volanteada*” desde la ruta hasta el mercado municipal⁶⁶.

Ante la visita del presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, al departamento de Amambay, realizada en marzo de este año a la Gobernación de dicho departamento, un grupo de manifestantes quiso exponer pancartas en relación a la falta de tierra, trabajo y varias otras inquietudes de la zona, y fueron reprimidos por los oficiales del Regimiento Escolta Presidencial, unidad encargada de la seguridad del jefe de Estado⁶⁷.

Instrucciones y comportamiento policiales durante las manifestaciones

En la práctica, el ejercicio de la fuerza pública por agentes del Estado no guarda proporción con la oposición que enfrentan de los grupos de manifestantes. Al mismo tiempo, paradójicamente es la falta de respuestas de ese mismo Estado lo que estos grupos vulnerables reclaman para la satisfacción de las demandas que presentan.

⁶⁵ *Diario Última Hora*, 4 de diciembre de 2004, pág. 8.

⁶⁶ *Diario La Nación*, 17 de diciembre de 2004, pág. 3.

⁶⁷ *Diario La Nación*, 22 de marzo de 2005, pág. 3.

En los últimos años las persecuciones a la dirigencia social, las amenazas de encierros y la violencia desatada y legalizada en el sistema penal –más que calmar– ha incentivado un clima de inseguridad social y de enfrentamientos que pueden desembocar en más violencia y muerte de no buscar salidas negociadas y democráticas. En este sentido, si bien manifestaciones y movilizaciones como las del sector campesino han presentado propuestas y pedidos puntuales, requiriendo en algunos casos medidas urgentes de parte del Estado, las respuestas gubernamentales no llegaron más allá de los acuerdos firmados para destrabar las protestas y pasaron a ser promesas incumplidas en el mejor de los casos, pues han habido muertes violentas de campesinos a manos de la policía, además de varios heridos/as y numerosos detenidos/as. En este contexto, las víctimas fatales ya suman más de 100 campesinos desde la apertura política en 1989 hasta el 2004, muertos en el marco de la lucha por la tierra.

La *Guía de Procedimiento Policial* es la normativa que tiende a unificar la intervención de esta institución en los distintos procedimientos en el marco de sus funciones y de acuerdo a las atribuciones legales. La guía contiene los procedimientos a ser seguidos en las manifestaciones públicas.

Con respecto a las actitudes violentas que pudieran surgir en las manifestaciones públicas, dispone medidas preventivas como el diálogo con la dirigencia, persuadiéndola a que deponga sus intenciones, y el establecimiento de un tiempo determinado con la advertencia de que se hará uso de la fuerza en caso de no acatarse las directivas policiales. En este caso la norma estipula que debe procederse a dispersar a los y las manifestantes utilizando los medios previstos para el efecto, teniendo en cuenta el empleo racional de la fuerza.

A criterio de la CODEHUPY, las instrucciones impartidas en la Guía de Procedimiento Policial deberían ser más precisas, en especial con respecto a la utilización de armas de fuego, y deberían adecuarse a las disposiciones especiales que se mencionan en los *Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley*, de Naciones Unidas.

A su vez, las medidas preventivas que establece la Guía de Procedimiento Policial no son lo suficientemente explícitas para que los policías no se extralimiten en el uso de la violencia en las represiones que realizan en las manifestaciones públicas. Además, no establece diferencia entre los procedimientos frente a las manifestaciones lícitas y las ilícitas.

Por último, el comportamiento de la Policía Nacional no refleja un fiel acatamiento de las instrucciones establecidas en la Guía de Procedi-

miento, como se ha demostrado en las represiones que recibieron ciudadanos y ciudadanas en manifestaciones realizadas en los últimos años. En la mayoría de las acciones colectivas el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional fue avalado por la Fiscalía. Podríamos sugerir las mismas recomendaciones para los miembros del Ministerio Público.

RECOMENDACIONES

- Concienciar a directivos y docentes de las instituciones educativas sobre el derecho que tiene el estudiantado de integrar organizaciones estudiantiles, establecido en el artículo 125 de la Ley N° 1.264/98 General de Educación, de manera a garantizar este derecho, así como modificar el artículo 127 de la misma ley, en relación a los criterios que deben tener en cuenta las instituciones educativas para aprobar o rechazar los estatutos de los centros de estudiantes.
- Derogar el Decreto N° 11.089/42, que si bien es inconstitucional, las normativas que establece aún son utilizadas en algunas instituciones educativas.
- Modificar la Ley Orgánica Municipal para garantizar la autonomía de las organizaciones vecinales.
- A las autoridades policiales: reglamentar el uso diferenciado de la fuerza de los efectivos policiales en las intervenciones para guardar el orden público. Los responsables policiales de estas intervenciones a menudo no diferencian delitos comunes de conflictos sociales, y las intervenciones no son las mismas.
- Terminar con la intervención de los militares en los conflictos sociales, y sobre todo como agentes para guardar el orden público en manifestaciones u ocupaciones de tierras.
- Como se viene mencionando en informes anteriores, la Ley N° 1.066/97 viola el derecho de manifestarse. Por lo tanto, es necesaria una modificación de esta ley, conocida también como del "Marchódromo", en especial en los artículos 3 y 4.
- Transparentar la información con que cuenta la Policía Nacional sobre el cumplimiento de la Ley N° 1.066/97.